

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : Juzgado de Letras y Gar.de Quirihue  
CAUSA ROL : C-1-2021  
CARATULADO : QUEZADA/MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE

Quirihue, catorce de Noviembre de dos mil veintidós

**VISTO, OIDO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, con fecha 05 de enero de 2021, compareció don **Rodrigo Alonso Navarrete Crisóstomo**, abogado, en representación de don **Nelson Javier Quezada Retamal**, estudiante de ingeniería en mantenimiento industrial, ambos domiciliados en Ortiz de Rozas N° 620, comuna de Quirihue, interponiendo demanda de Responsabilidad Extracontractual en procedimiento ordinario de menor cuantía en contra de la **Ilustre Municipalidad de Quirihue**, representada legalmente por su alcalde don **Richard Irribarra Ramírez**, Técnico Jurídico, domiciliado para estos efectos en Esmeralda 698, comuna de Quirihue, todos debidamente individualizados en autos. Solicita que:

1.- Se tenga por interpuesta la demanda, que se acoja a tramitación y, en definitiva, se dé a lugar a la indemnización de perjuicios en contra de la Ilustre Municipalidad de Quirihue, condenándola a resarcir los perjuicios causados a la víctima;

2.- Que se condene a la demandada al pago de quince millones de pesos (\$15.000.000.-); y finalmente,

3.- Que se condene expresamente en costas a la demandada.

Funda su pretensión en que, con fecha 27 de junio del año 2018, don Nelson Javier Quezada Retamal, luego de aprobar los exámenes teóricos, prácticos y psicomotrices respectivos, obtuvo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Ilustre Municipalidad de la comuna de Quirihue, su licencia de conducción clase B y C, para vehículos de tracción mecánica, la cual lleva el folio CA 18618438. Que dicho documento fue expedido aparentemente en términos legales por la referida Dirección Tránsito y Transporte, cumpliendo así, presumiblemente, con todos los protocolos y requerimientos establecidos para que dicho instrumento público tuviera una vigencia legal.

Señala que, conforme con lo relatado precedentemente, pagó a la Ilustre Municipalidad de Quirihue los derechos correspondientes a la suma de \$23.770 para obtener la entrega de su licencia de conducir, según documento N°007507 emitido con fecha 20 de junio del año 2018, que utilizó de forma continua y sin mayores inconvenientes durante el periodo que va julio del año 2018 hasta enero del año 2020. Afirma el actor que hacía uso del vehículo de su madre para desempeñarse como obrero



en faenas agrícolas durante el año 2019 y 2020, y para asistir regularmente a clases durante el periodo lectivo y también para fines recreacionales con su familia, pareja y amigos.

Que, con fecha 18 de enero del año 2020, durante el periodo estival, don Nelson Javier Quezada Retamal acompañado de su familia, se dirigía a la comuna de Pelluhue, para poder disfrutar de un fin de semana en la playa. Según afirma, este descanso se vio intempestivamente interrumpido por un control vehicular en la comuna de Pelluhue realizado por personal policial del retén de Curanipe correspondiente a la Prefectura Segunda de la Comisaría de Chanco. Ante ello, procedió a entregar toda la documentación requerida, ante lo cual, el personal policial que estaba realizando el procedimiento, le manifestó que su licencia de conducir era aparentemente falsa, debido a que no se encontraba inscrita en el Servicio de Registro Civil e Identificación de nuestro país, y además porque la iconografía que caracteriza a las licencias de conducir se encontraba invertida, lo que presuntamente daba cuenta de una ilegalidad.

Agrega que, con posterioridad a ello, el actor fue detenido desde las 11:45 hasta las 14:00 horas del día 18 de enero del año 2020 y fue llevado hasta las dependencias del retén de la comuna de Curanipe en la cual se le indicó que se procederá a incautar su licencia de conducir y demás documentación pertinente, a fin de que sus antecedentes fueran remitidos al Ministerio Público, en particular a la fiscalía local de la comuna de Cauquenes, quienes determinarían el conducto regular aplicable. Ante esta situación, se vio privado de poder hacer uso de su licencia de conducir desde el día 18 de enero del año 2020 en adelante hasta el día martes 30 de junio 2020 momento en el cual el Ministerio Público accedió a la solicitud de devolución del instrumento incautado. Todo lo anterior, ha implicado un detrimento patrimonial efectivo en su representado y también en su esfera extrapatrimonial, según señala.

En cuanto al derecho, aduce que, nuestra normativa de derecho patrimonial privado contempla la posibilidad de interponer acciones indemnizatorias fundadas en acciones y omisiones culposas o dolosas de un agente que causen un daño. Ello se reconoce en el título XXXV del Libro IV de nuestro Código Civil, en particular se sostiene la procedencia de esta acción en el artículo 2314 *“El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”* y el artículo 2329 en que se señala que *“por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”*.

Sostiene además que, la acción indemnizatoria tiene su fundamento normativo en nuestra Constitución Política de la República, la cual reconoce en sus artículos 19 N° 1 y 24, el derecho a la vida, la integridad física y psíquica y además el derecho de propiedad en sus diversas especies. Así el artículo 19 señala que *“La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”* y el artículo 19 N° 24 al asegurar a todas las personas: *“El derecho de propiedad en sus*



*diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporeales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”.*

Con respecto de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado – según señala el demandante- *“Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal”.*

Así, con respecto de la falta de servicio –argumenta-, citando a don Pablo Rodríguez Grez, es aquella que existe cuando *“un órgano público, obrando contra derecho, no ha funcionado debiendo hacerlo, cuando el servicio ha funcionado defectuosamente o lo ha hecho con retardo, causando daño al administrado”*; y al profesor don Osvaldo Oelkers Camus quien sostiene que *“Falta el servicio en los siguientes casos: a) cuando la administración pública ha funcionado mal, o sea el daño es causado por una acción positiva; b) cuando no ha funcionado, o sea el daño se ha cometido por omisión, cuando existe un deber funcional de actuar; y c) cuando lo haya hecho tardíamente, o sea, cuando el daño es cometido por una falta de diligencia funcional”.*

Con respecto de la falta de servicio infraccional, cita a ley N° 18.290, la que regula de un modo general, en su *“Título I. De los conductores y de las licencias”* los tipos de licencias de conducción, los requisitos que deben cumplir los postulantes para obtener sus respectivas licencias, deberes y obligaciones de los funcionarios de la Dirección de Tránsito y Transporte, y los procedimientos que deben ser aplicados para las aprobaciones o rechazos de las referidas licencias de conducción. Son, en particular, los siguientes artículos los que determinan un deber de actuar para los órganos de la administración:

**“Artículo 22.-** *Los Departamentos de Tránsito y Transporte Público Municipal deberán conservar archivados, en la forma que determine el reglamento, todos los antecedentes requeridos para otorgar una licencia de conductor y toda modificación que en ella se produzca. Asimismo, se archivarán los antecedentes en los casos que se rechace el otorgamiento de una licencia; Artículo 23.-* *El titular de una licencia de conductor deberá registrar su domicilio y los cambios del mismo en forma determinada y precisa ante el Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal de la Municipalidad que hubiere otorgado la licencia o en aquella de su nuevo domicilio. El Departamento registrará estos datos en la licencia y los comunicará*



al Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados dentro de quinto día. Igual procedimiento se aplicará en los casos de cambios de nombres o apellidos del titular de la licencia. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Carabineros de Chile tendrán acceso directo, vía computacional o por cualquier otro medio, al Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados y al Registro de Vehículos Motorizados. La información así obtenida tendrá el carácter de reservada respecto a las personas involucradas.;

**Artículo 24.-** Los informes que expida el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Registro Nacional de Conductores y los resultados, tanto parciales como generales de los exámenes, serán emitidos en formularios especiales, los que se archivarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.”

Con respecto de la cuantía de la indemnización afirma que, considerada la edad de la víctima, desvinculación laboral, certificado de antecedentes penales sin anotaciones, pérdida de antigüedad como conductor, imposibilidad de desplazamiento mediante vehículo particular, sufrimiento, dolor y angustia causados, entre otros, los avalúa de la siguiente manera:

**1.- Cuatro millones de pesos (\$4.000.000.-) por el concepto de daño emergente:** que se entiende configurado por el hecho de que don Nelson Quezada Retamal se desempeñaba como temporero, en particular en la función de “raleo de Kiwis Hayward del fundo Dadinco, San Nicolás” en la empresa Carsol Fruit S.A. 79.547.780-2, quien debía percibir una remuneración base de \$301.000 más gratificaciones anuales equivalentes al 25% de las remuneraciones mensuales imposables del trabajador. A consecuencia de los desafortunados hechos acaecidos el día 18 de enero del año 2020, en virtud del cual su representado fue objeto de una investigación penal por parte del ministerio público, en la cual se vio privado de hacer uso de su licencia de conducir durante más de 5 meses, se vio en definitiva impedido de poder concurrir a su trabajo, debido a que requería imperiosamente del uso de su vehículo como medio de transporte para llegar a él;

**2.- Tres millones de pesos (\$3.000.000.-) por concepto de lucro cesante** por el hecho de haber sido desvinculado de su anterior trabajo por haber incumplido sus obligaciones y no poder trasladarse a dicho lugar, no ejerció labor remunerada durante meses, situación que podría haber cambiado definitivamente si él hubiera contado con su licencia de conducir, ya que podría haber empleado su vehículo para los desplazamientos a los predios en los cuales él trabajaba; y finalmente,

**3.- Ocho millones de pesos (\$8.000.000.-) por concepto de daño moral** configurado por la angustia e incertidumbre bajo la cual estuvo sometido don Nelson Quezada Retamal, quien posee irreprochable conducta anterior, quien nunca antes había sido objeto de investigaciones penales en su contra dirigidas por el ministerio público, quien no pudo hacer uso de su licencia de conducir durante más de 5 meses siendo el único miembro de su familia que contaba con vehículo y licencia de



conducción, la consecuencial pérdida de su empleo al no poder transportarse en vehículo a su lugar de trabajo, han generado un dolor emocional claro y certero para el demandante debido a actuaciones y circunstancias ajenas del todo a su voluntad.

**SEGUNDO:** Que, con fecha 27 de enero de 2021, compareció don **Baltazar Morales Espinoza**, abogado, en representación de la **Ilustre Municipalidad de Quirihue**, contestando demanda, solicitando el rechazo de la misma en todas sus partes.

Funda su defensa en la falta de legitimación pasiva de la Ilustre Municipalidad de Quirihue para ser demandada en autos, toda vez que –según señala el demandado– es el Servicio de Registro Civil e Identificación, el ente público responsable de revisar y/o corroborar la idoneidad y contenido de la documentación que le es remitida, en términos tales de detectar los errores o falencias de la misma. Señala que, a la luz de los acontecimientos relatados en la demanda, es claro que los deberes de revisión y/o fiscalización por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación, no se cumplieron por el ente público antes señalado, por lo cual es claro e indubitado, que es la entidad pública responsable al efecto.

En subsidio, la parte demandada alega la improcedencia del régimen jurídico invocado, toda vez que se mencionan como fundamento normativos el Código Civil, la Constitución Política de la República y la Ley de Tránsito N° 18.290. En este sentido, continúa la demandada, se ha omitido la invocación de la norma fundamental en el materia aplicable al campo municipal como lo es el artículo 152 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades en que se señala que *“Las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, las que procederá principalmente por falta de servicio. No obstante, las municipalidades tendrán derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal”*. Por ello, señala que, se está fundamentando en autos una demanda en un régimen jurídico que no le es aplicable al municipio, el cual como ente público, tiene un régimen jurídico propio, específico, conforme a la cual responde; lo que hace improcedente la demanda de autos.

Señala además, en subsidio de las dos anteriores, la ausencia de nexo causal o daño, dado que los hechos expuestos en la demanda, no son constitutivos de generar, daño alguno, y menos de las características y montos indicados en la demanda. En efecto, es el propio demandante quien relata y explica que estuvo detenido por el lapso de dos horas conforme al procedimiento policial, lo cual es, absolutamente ínfimo y muy menor, y que en el más extremo de los escenarios, puede generar una contrariedad o molestia por parte del afectado, pero en caso alguno, ser constitutivo o generador de daño alguno que deba ser indemnizado.

**TERCERO:** Que, con fecha 24 de febrero de 2021, se llevó a cabo la audiencia de conciliación entre las partes, proponiendo esta magistratura bases para el arreglo, la que no se produjo atendida la rebeldía de la parte demandada.

**CUARTO:** Que, se recibió la causa a prueba con fecha 30 de marzo de 2021, fijando el tribunal como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos:



- 1.- La existencia de daños en el actor, naturaleza y monto;
- 2.- Conducta negligente de la demandada en el proceso de concesión de la licencia de conducir;
- 3.- Relación de causalidad entre la conducta negligente de la demandada, en su caso, y los daños existentes en el actor.

**QUINTO:** Que, la parte demandante rindió la siguiente prueba en juicio:

**A.- DOCUMENTAL:** Acompañó con fecha 5 de enero de 2021: 1.- Certificado de nacimiento de don Nelson Quezada Rivas, expedido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de fecha 19 de diciembre del año 2020. 2.- Certificado de hoja de vida del conductor de don Nelson Quezada Rivas, expedido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de fecha 29 de diciembre de 2020. 3.- Solicitud y proveído de facultad de no iniciar investigación presentada por el Ministerio Público en causa Rol 617-2020 del Juzgado de Garantía de Quirihue. 4.- Ordinario 031-2020 emitido por la Dirección de Tránsito y Transporte por la Ilustre Municipalidad de Quirihue de fecha 24 de enero de 2020. Acompañó fecha 3 de septiembre de 20202, 5.- Certificado de nacimiento de doña Florentina del Carmen Retamal Retamal, cédula nacional de identidad N° 13.792.692-k emitido por el servicio de registro civil e identificación. 6.- Contrato de trabajo celebrado entre empresa Carsol Fruit S.A y don Nelson Quezada Retamal con fecha 13 de enero del año 2020. 7.- Documento que da aviso de término de contrato de trabajo de fecha 23 de enero del año 2020 firmado por la empleadora Solange Navarrete Crisóstomo. 8.- Contrato de trabajo celebrado entre Carsol Fruit S.A. y don Nelson Quezada Retamal de fecha 06 de julio del año 2020. 9.- Licencia de conducción de Nelson Quezada Retamal, hoja de ruta y certificado de exámenes teóricos y prácticos de conducción aprobados por el solicitante en el departamento de tránsito de la Ilustre Municipalidad de Quirihue. 10.- Documento de solicitud de examen de conducción y declaración jurada de fecha 20 de junio del año 2018. 11.- Formulario de denuncia efectuado por Nelson Quezada Retamal a la Secretaría Ministerial de Transportes y telecomunicaciones con fecha 18 de enero del año 2020. 12.- Contrato de trabajo celebrado entre don Nelson Quezada Retamal y empresa Agroinvest Spa Rut 76.532.516-1 con fecha 07 de octubre del año 2020. 13.- Block de notas de licencias aprobadas e inscritas en el departamento de tránsito de la Ilustre Municipalidad de Quirihue. 14.- Certificado expedido por don Juan Quijada Sandoval en calidad de Director de Tránsito y Transporte Público de la Ilustre Municipalidad de Quirihue de fecha 20 de enero del año 2020. 15.- Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Conductores de folio N° 186183438 de fecha 20 de enero del año 2020. 16.- Informe diagnóstico forense de don Nelson Javier Quezada Retamal elaborado por psicólogo clínico Rodrigo Gómez Molina. 17.- Contrato de prestación de servicios educacionales entre Instituto nacional de Capacitación de fecha 22 de enero del año 2020. 18.- Certificado de pago N° 007507 de licencia de conducir clase b y c de fecha 22 de junio del año 2018. 19.- Copia de carpeta investigativa de causa RUC 2000074028-5 de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XGXXCXEXMG

fiscalía de Cauquenes que contiene parte policial, extracto de filiación y antecedentes, declaración de funcionario aprehensor, acta de información de derechos del detenido, acta de notificación de derechos del detenido, acta de estado de salud, licencia de conductor, acta de incautación o entrega de especies, e información de término de causa.

**20.-** Documento de fiscalía local de Cauquenes que contiene información de término de causa. **21.-** Certificado de Antecedentes para fines especiales de Nelson Quezada Retamal emitido por el servicio de registro civil e identificación.

**B.- TESTIMONIAL:** con fecha 14 de agosto de 2022, rindió prueba testimonial: **1.-** Oriana Belén Méndez Bustos, cédula nacional de identidad 21.530.310-2; **2.-** Doña Lilian Guillermina Campos Canales, cédula nacional de identidad 15.158.771-2; **3.-** don Ignacio Antonio Molina Molina, cédula nacional de identidad 19.821.617-8; y, finalmente, **4.-** Don Carlos Manuel Vera Alvear, cédula nacional de identidad 20.357.884-9.

**C.- ABSOLUCIÓN DE POSICIONES:** Que, con fecha 11 de octubre de 2022, absolvió posiciones, la demandada representada por su alcalde don Richard Iribarra Ramírez, cédula nacional de identidad 8.690.856-1

**SEXTO:** Que, la parte demandada no rindió prueba en juicio.

**SÉPTIMO:** Que, con fecha 24 de octubre de 2022, se citó a las partes a oír sentencia.

**OCTAVO:** Que con la prueba rendida en autos, se puede dejar establecido lo siguiente:

a) Consta en dossier incorporado que contiene el registro de obtención de licencia de conducir del actor de la Municipalidad demandada, que efectivamente el actor con fecha 20 de junio de 2018 dio inicio a los trámites necesarios y rindió exámenes pertinentes para la obtención de su licencia de conducir, obteniéndola y pagando el correspondiente derecho municipal. Se registra dentro de los antecedentes de la carpeta, un formulario de fecha 27 de junio de 2018 dirigido al registro nacional de conductores dando cuenta de la emisión de la licencia de conducir del actor, no consta sin embargo comprobante de remisión del mismo.

b) Fue acompañado parte policial de 18 de enero de 2020 de la segunda comisaría de Chanco, retén Curanipe, el que da cuenta del procedimiento policial que involucró al demandante en un control vehicular en el que fue detenido a las 11:45 horas al portar una licencia de conducir clases B y C, a simple vista “falsificada”, ya que mantenía errores de impresión, sin holograma ni número de folio en el frontis costado derecho, manteniéndolo en la parte trasera, verificándose la falta de inscripción en el registro de conductores. Consta en el mismo documento que la licencia fue incautada y enviada en cadena de custodia a la Fiscalía local de Cauquenes. Consta declaración del funcionario aprehensor, acta de lectura de derechos al detenido y comprobante de falta



de registro de la licencia de conducir en el registro respectivo del Servicio de Registro Civil e Identificación.

c) En copia de la carpeta investigativa acompañada consta el ingreso de los antecedentes del actor a la fiscalía Local de Cauquenes el 21 de enero de 2020, e ingreso por el actor al sistema SIAU de fiscalía el día 22 de enero del mismo año, aportando como antecedente a la investigación un certificado emitido por el Director de Tránsito de la municipalidad de Quirihue, en donde se señala que el actor efectivamente obtuvo su licencia de conducir y que por “errores informáticos” no había sido registrada en el registro civil, estando a la espera de resolución de tal error, aquello es corroborado con el certificado mencionado el que figura expedido el día 20 de enero de 2020, con firma y timbre de don Juan Quijada Sandoval, Director de tránsito y transporte público Subrogante de la I. municipalidad de Quirihue. Asimismo consta en este certificado “temas de mala confección (sello al revés)”, para cuya corrección necesitaban la licencia de conducir en sus dependencias.

d) Acompañó el actor oficio de Director de tránsito de la municipalidad de Quirihue a Fiscal de Cauquenes, de fecha 24 de enero de 2020, en el que informa que el actor de autos obtuvo licencia de conducir en dicha municipalidad el 27 de junio de 2018, afirmando haber enviado la información al Servicio de registro civil para su inscripción, encontrarse en proceso de resolver el error de no aparición de aquel dato en la hoja de vida del conductor, afirmando la falta de existencia del requisito del sello de la licencia, agregando en el punto 6.- *“Para facilitar la gestión y asumiendo nuestra responsabilidad en el caso que afecta laboralmente al Sr. Quezada Retamal, hemos dispuesto entregar una nueva licencia de conducir al Sr. Quezada Retamal apenas usted autorice su canje...”*

e) Asimismo, se acompañó certificado del Director de Tránsito y Transporte Público de la Ilustre Municipalidad de Quirihue, de fecha 20 de enero de 2020, que da cuenta que el actor obtuvo licencia de conducir el 27 de junio de 2018, clases B y C y que *“por errores informáticos no ha sido registrada al Registro Civil en la fecha indicada, lo cual estamos en proceso de resolver dicho error”* y que para *“resolver temas de mala confección “sello al revés”* requerirían la licencia de conducir original en sus dependencias. Dicho certificado fue emitido a petición del interesado para ser presentado en Fiscalía de Cauquenes.

f) Se acompañó igualmente escrito del Ministerio Público en que solicita aprobación del Juzgado de Garantía de la decisión de no iniciar investigación penal, respecto a los hechos que motivaron este proceso, al haberse descartando la falsedad de la licencia que el 18 de enero de 2020 portaba el demandante, en virtud de oficio de la Dirección de tránsito de la municipalidad de Quirihue. Dicha decisión fue aprobada por resolución de 24 de junio de 2020 de este tribunal.





g) Consta en documento acompañado “hoja de vida del conductor” la obtención de licencia de conducir del demandante en la municipalidad de Quirihue, clases B y C, y registrando como fecha de otorgamiento “24 enero 2020”.

h) Acompañó el actor contrato de trabajo agrícola de temporada por faena determinada suscrito por el actor y la empresa “Carsol Fruit S.A.” de fecha 13 de enero de 2020, en donde consta la contratación del actor para realizar labores de “raleo de kiwis” en el Fundo Dadinco en la comuna de San Nicolás por un sueldo base equivalente a \$301.000 más gratificación legal garantizada del 25%, la contratación fue realizada hasta el término de la faena. El actor acompañó igualmente carta de despido de fecha 23 de enero de 2020, en donde consta su despido por la causal del artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo, estos es por no haber concurrido a sus labores sin causa justificada, los días 20, 21, 22, 23 de enero de 2020. Acompañó igualmente mismo tipo de contrato de trabajador agrícola de temporada de fecha 6 de julio de 2020 , un anexo de 1 de junio del mismo año; contrato de 7 de octubre de 2020 de la misma naturaleza pero celebrado con la empresa “Agroinvest SPA” para la faena Plantación de arándanos.

i) Acompañó el actor peritaje psicosocial forense de fecha 12 de junio de 2022, efectuado por don Rodrigo Gómez Molina, Psicólogo, perito forense, el que no habiendo sido objetado, da cuenta de evaluación psicológica realizada al actor, el que trabajó sobre hipótesis de existencia o no en el demandante de daño psicológico, emocional y moral que interfiere o perturba en su diario vivir, describiendo el suceso fundante de la demanda, el grupo familiar del peritado, estructura de funcionamiento familiar, y dentro de sus resultados destaca producto de su situación legal síntomas y signos de ansiedad, dificultades en el sueño, nerviosismo, irritabilidad, hiperactividad y estrés postraumático, con dificultades de movilización hacia su trabajo y apoyo a su familia en controles médicos de su abuela y madre, conforme a el proceso metodológico da cuenta en sus conclusiones que “Nelson Quezada Retamal presenta daño emocional, moral y psicológico producto de la situación vivida con carabineros al momento de controlar los antecedentes del vehículo y de él propios, estando detenido por licencia de conducir falsa, cual hace que presente estrés postraumático asociado a cuadros de ansiedad, depresión, dicotomía, labilidad emocional y pérdida de trabajo”

j) Declararon en esta causa los testigos Oriana Méndez Bustos, Lilian Campos Canales, Ignacio Molina Molina, y Carlos Vera Alvear, quienes previamente juramentados, libres de tachas, y sobre los 3 puntos de prueba estuvieron contestes en declarar que supieron de la detención del actor por Carabineros el día 18 de enero de 2020 por haber falsificado licencia de conducir, la que sólo apareció inscrita en su hoja de vida de conductor el 24 de enero de 2020, acudiendo el demandante varias veces a la municipalidad de Quirihue en donde no se le dio solución. Se inició causa en fiscalía la que concluyó al haber sido lo sucedido responsabilidad de la Municipalidad de Quirihue.



La licencia además contenía el sello al revés. La falta de registro de la licencia de conducir ha ocurrido a varias personas que han obtenido licencia de conducir en la municipalidad de Quirihue. El actor perdió tiempo de antigüedad de conductor en su hoja de vida, perdió su trabajo, pues se movilizaba en auto para aquello, para el traslado de su familia y para el traslado a su centro de estudios (INACAP), lo que era relevante al vivir en zona rural y por la situación misma de pandemia (agregó el testigo Molina que el demandante debía contratar fletes o uber para movilizarse); el día de los hechos iba con su familia, por lo que al realizarse el control vehicular y detención se produjo en él daños psicológicos y morales, los que no han sido reparados por la municipalidad.

k) En cuanto a la prueba de absolución de posiciones, el absolvente únicamente admitió las preguntas afirmativas del pliego signadas con los números 2, 3, 4 y 5, teniendo por acreditado en consecuencia que don Francisco Almendra era el Director de Tránsito en el año 2018; que dicho departamento es quien otorga las licencias de conducir una vez cumplidos los requisitos legales; que debe registrar los datos de los conductores y licencias de conducir, comunicándolo al registro nacional de conductores del servicio de registro civil dentro de quinto día hábil, y que en dicho proceso de otorgamiento de licencia de conducir, participa únicamente personal municipal del departamento de tránsito.

**NOVENO:** Que, en el caso de marras, la responsabilidad que se reclama de la Ilustre Municipalidad de Quirihue, es por la falta de servicio en que incurrió al no enviar oportunamente los antecedentes necesarios para la inscripción de la licencia de conducir clases B y C otorgada a don Nelson Quezada Retamal al Servicio de Registro Civil e Identificación para la respectiva inscripción en el registro de conductores por parte de la institución antes señalada. Asimismo por haberse confeccionado la licencia en forma defectuosa.

**DÉCIMO:** Que la falta de servicio *“es un factor de atribución de responsabilidad patrimonial de la administración, vale decir el fundamento jurídico en cuya virtud los costos de los daños sufridos por un particular o la compensación de los mismos son asumidos por aquella, correspondiendo a toda acción u omisión de la administración que genere daños para el administrado y en la que ha existido una falla de cualquier orden en el servicio”* (José Luis Zavala Ortiz, *Jurisprudencia de la falta de servicio*, Editorial Libromar, edición junio 2018, pp. 2). Que el fundamento normativo de la responsabilidad por falta de servicio del Estado está contenido en las normas de la Constitución Política de la República, en particular artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 38, como asimismo en la ley 18.575, en sus artículos 4 “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones” y artículo 42 “los órganos de la administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio”. Acreditada por tanto la falta de servicio, nace la responsabilidad del Estado y por ende la obligación de indemnizar.



El supuesto de la falta de servicio es la anormalidad en el funcionamiento de los servicios públicos. Esta anormalidad comprende los siguientes aspectos i) que el servicio no actuó, debiendo hacerlo; ii) que actuó, pero de mala forma (fuera del standard medio de funcionamiento); iii) que actuó tardíamente. (José Luis Zavala Ortiz, citando “La responsabilidad de la administración del Estado por falta de servicio y por el daño ambiental”. Revista de Derecho UCV XXIII, Valparaíso, p. 256)

**UNDÉCIMO:** Que en cuanto a la responsabilidad estatal en el ámbito municipal, las normas citadas anteriormente se complementan con las de la ley 18.695, Orgánica constitucional de Municipalidades, pues para que concurra la falta de servicio debe existir una obligación legalmente consagrada. A este respecto cobra importancia la LOC de Municipalidades, que en su artículo 152 que establece “Las Municipalidades incurrirán por responsabilidades por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio...”

Que, unido a lo anterior, deben considerarse las normas regulatorias del proceso de otorgamiento de las licencias de conducir. Al efecto destacan los artículos 23 y 24 de la ley de tránsito 18.290, que consagran en primero término el registro de los antecedentes de la concesión de las licencias de conducir, al establecer *“conservar archivados, en la forma que determine el reglamento, todos los antecedentes requeridos para otorgar una licencia de conductor y toda modificación que en ella se produzca”* y el hecho de registrar los datos de las licencias otorgadas y comunicarlos al Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados dentro del quinto día, disponiendo: *“El Departamento registrará estos datos en la licencia y los comunicará al Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados dentro del quinto día”*

**DUODÉCIMO:** Que establecido el marco normativo aplicable en autos y en mérito de la prueba rendida en el proceso, detallada en el considerando octavo precedente, documental no objetada, declaraciones testimoniales contestes y libres de techas, además de la prueba confesional, se puede concluir que efectivamente la municipalidad de Quirihue, incurrió en una falta de servicio al no haber dado cumplimiento respecto de la obtención de licencia de conducir del actor a todo el proceso, en particular en haber omitido el envío al registro nacional de conductores de vehículos motorizados, no figurando por ende en el registro indicado como válidamente obtenida, lo que llevó al personal de Carabineros a presumir, además por la forma de postura de sellos en la licencia, que la licencia que portaba el actor el 18 de enero de 2020, era falsificada, dando con ello inicio a un investigación penal llevada por la Fiscalía de Cauquenes, que comenzó con la detención del demandante por unas horas, incautándose desde el inicio del procedimiento la licencia de conducir, y terminándose el mismo por la fiscalía local de Quirihue a través de la aprobación por este tribunal de la decisión de no iniciar investigación, con fecha 24 de junio de 2020.



**DÉCIMOTERCERO:** Que habiéndose establecido la falta de servicio por parte de la demandada, queda ahora determinar y dilucidar si la demandante ha sufrido el daño alegado y si este daño es producto de la falta de servicio. En los motivos siguientes se analizará el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral, alegados por el actor como producidos a consecuencia de la falta de servicio de la demandada.

A este respecto, cabe precisar que se ha entendido por nexo causal o causalidad todas aquellas condiciones que son necesarias para que un daño se produzca, es decir, el requisito *sine qua non* sobre el cual, si no hubiere existido la acción u omisión culposa o dolosa, no se derivarían los daños producidos sobre la víctima. Por ello, la causalidad se fundamenta desde dos perspectivas: la primera que dice relación con que sólo se responden de los daños que se siguen como consecuencia del hecho del demandado, y, por otro lado, como requisito que limita la responsabilidad, porque no se responde de todas las consecuencias del hecho, sino sólo de aquellas que en virtud de un juicio normativo son atribuibles al mismo (*Barros, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Editorial Jurídica, Santiago de Chile Segunda Edición. Pág .392-393*)

**DÉCIMO CUARTO:** Que, con respecto del daño emergente, el actor sostiene que se vio privado de hacer uso de su licencia de conducir durante más de 5 meses, lo que le imposibilitó concurrir a su trabajo, debido a que requería imperiosamente del uso de su vehículo como medio de transporte para llegar a él. Según señala, lo anterior determinó la pérdida de su trabajo. Incorpora a este tipo de daño el monto correspondiente al dinero que su representado tuvo que desembolsar para poder trasladarse desde un lugar a otro, mediante el transporte público, como consecuencia de la privación del uso de su licencia de conducir.

En este sentido, es preciso señalar que, se ha entendido por daño emergente *todo detrimento, pérdida o menoscabo que sufre alguien ya sea sobre su persona o sobre sus bienes de forma efectiva y actual*. En este sentido, lo que caracteriza al daño emergente es la certeza del daño producido. Así las cosas, se desprende de lo razonado, que la pérdida de trabajo como temporero por la parte demandante, dice más bien relación a los emolumentos que a consecuencia de la conducta negligente de la demandada dejó de percibir, por lo que alegar este menoscabo dentro la categoría de daño emergente carece de pertinencia.

Que, con respecto de los demás gastos alegados por la parte demandante que tuvieron su causa en la retención de la licencia de conducir, no existe en autos ni en la prueba documental y testimonial rendida, certeza sobre cuáles serían dichos gastos ni de su cuantía. Sólo se limita a caracterizarlos como categorías generales. A mayor abundamiento, el demandante en su libelo se limita a “estimarlos” en reiteradas ocasiones por lo que no se pueden extraer mayores antecedentes que permitan tener claridad a su respecto.



Por lo anterior, se rechazará la pretensión fundada en el daño emergente alegado por el demandante.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, con respecto del lucro cesante, señala el demandante, que no ejerció labor remunerada durante meses, situación que podría haber cambiado definitivamente si él hubiera contado con su licencia de conducir, ya que podría haber empleado su vehículo para los desplazamientos a los predios en los cuales él trabajaba.

Que, por lo anterior, y aun constando en autos que don Nelson Quezada Retamal fue despedido por no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada trabajo los días 20, 21, 22 y 23 de enero del año 2020, y ello puede efectivamente atribuirse a la falta de servicio de la demandada al haber causado la privación de la licencia de conducir al actor, siendo el vehículo el medio que utilizaba para acudir a su trabajo, además de transporte para acudir a sus estudios y necesidades familiares, lo cierto es que este daño no es posible de cuantificar, pues si bien el demandante contaba con un contrato de trabajo, aquél lo era por obra o faena en labores agrícolas de temporada, no existiendo prueba en autos de cuál fue el tiempo de duración siquiera estimado de aquella faena, máxime si en julio y octubre del mismo año figura con nuevas contrataciones.

Por ello, se rechazará igualmente la indemnización por dicho concepto.

**DÉCIMO SEXTO:** Con respecto del daño moral, el demandante señala que producto de la situación antes descrita ha vivido bajo angustia e incertidumbre, a pesar de su irreprochable conducta anterior. Agrega que, además, no pudo hacer uso de su licencia de conducir durante más de 5 meses, siendo el único miembro de su familia que contaba con vehículo. Estas circunstancias, -según argumenta- le han generado un dolor emocional claro y certero.

Que, la Excma. Corte Suprema ha conceptualizado el daño moral como: “un mal, un perjuicio o una aflicción en lo relativo a las facultades espirituales, vale decir, cuando se ocasiona a una persona un dolor o aflicción en sus sentimientos” (R.D.J., T. LXVIII, secc. 4, pág. 168). Pues bien, respecto del daño moral demandado, ha de tenerse especialmente presente, que si bien, el daño moral supone perjuicios inconmensurables en dinero, porque no existe mercado que permita regular los mismos, esto no impide su compensación pecuniaria por el denominado “*pretium doloris*” o sufrimiento afectivo del demandante, a consecuencia del falta de servicio fundante de la acción, y cumplir con ello la función de satisfacer la pretensión legítima reparación y compensación por la pérdida de licencia de conducir por más de 5 meses. Que, de lo anterior, se colige la incidencia que representó para el actor, importando un cambio en el desarrollo de su vida cotidiana.

En estas condiciones, teniendo en cuenta la detención sufrida por el actor, los trámites administrativos, el periodo por el cual estuvo sin licencia de conducir, la pérdida



de su fuente laboral, y demás padecimientos y afecciones sufridas por el actor, se regulará prudencialmente a favor del demandante por concepto de indemnización de daño moral la suma de \$4.000.000.-

**DECIMO SÉPTIMO:** Que, con respecto de las alegaciones efectuadas por la parte demandada, cabe precisar que, con respecto de la falta de legitimidad pasiva de la Ilustre Municipalidad de Quirihue debe ser rechazada. Esto, toda vez que, como se señaló precedentemente, era obligación de la Ilustre Municipalidad de Quirihue y no del Servicio de Registro Civil e Identificación la comunicación oportuna de los datos de obtención de la licencia de conducir otorgada y sus modificaciones al Registro destinado al efecto. Por ende, la Ilustre Municipalidad de Quirihue si tiene legitimidad pasiva para poder ser demandada en juicio.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, con respecto de la improcedencia del régimen jurídico invocado, esta alegación debe ser rechazada toda vez que corresponde a los tribunales de justicia la aplicación correcta del derecho, siendo pertinente a este respecto el aforismo "*Da mihi factum, dabo tibi ius*" - dame los hechos que yo te daré el derecho - y el actor si bien ha citado la normativa base aplicable, omitiendo la específica, ello no obsta a que el tribunal haga la aplicación de la normativa en forma completa.

**DÉCIMO NOVENO:** Que, con respecto de la ausencia de nexo causal o daño alegado por el demandante estas deben ser rechazadas parcialmente toda vez que, como se señaló precedentemente, el nexo causal o causalidad y el daño han sido establecidas en lo pertinente tan sólo en cuanto al daño moral conforme al análisis efectuado en las motivaciones precedentes.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 1698 del Código Civil; artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República, artículo 42 de la Ley de Bases de la Administración Pública; artículo 152 de la Ley Orgánica de Municipalidades; artículos 144, 160, 170, 342, 346 y 394 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

**I.** Que, Se **ACOGE** la demanda deducida por don Rodrigo Navarrete Crisóstomo en representación de don **Nelson Javier Quezada Retamal**, en contra de la **Ilustre Municipalidad de Quirihue**, representada por su alcalde don Richard Iribarra Ramírez, **SOLO EN CUANTO** se condena a esta última al pago al actor de la suma de \$4.000.000.- por concepto de daño moral.

**II.** Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida.

Dictada por doña **Ivonne Concha Becerra**, Jueza Titular del Juzgado de Letras, Familia y Garantía de Quirihue.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XGXXCXEXMG

En Quirihue, a catorce de Noviembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.

